

# INFORMARTIVO DE RELATORIA MAYO DE 2025

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA



## Magistrados

Dra. Nelcy Vargas Tovar

Dr. Enrique Dussán Cabrera

Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Dr. Jorge Alirio Cortes Soto

Dr. José Miller Lugo Barrero

Dr. Ramiro Aponte Pino

## Relator

Dr. Danny Joan Guevara Silva

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<b>Consejo de Estado</b> Sala de lo Contencioso Administrativo  <b>Sección Segunda</b> <b>Subsección A</b> C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez	<b>Nulidad y Restablecimiento del Derecho</b>  <a href="#"><u>05001-23-33-000-2016-00363-01</u></a> <a href="#"><u>(0404-2021)</u></a>  20 de marzo de 2025
<p>El Consejo de Estado reconoció una relación laboral encubierta entre una instrumentadora quirúrgica y una entidad hospitalaria, pese a un contrato de prestación de servicios. Determinó que existía subordinación, permanencia y labor misional, lo que desvirtúa la naturaleza del contrato. Ordenó el pago de prestaciones sociales, pero no el reembolso de aportes a seguridad social, reafirmando el principio de primacía de la realidad sobre las formas contractuales.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<b>Consejo de Estado</b> Sala de lo Contencioso Administrativo  <b>Sección Segunda</b> <b>Subsección A</b> C.P. Elizabeth Becerra Cornejo	<b>Nulidad y Restablecimiento del Derecho</b>  <a href="#"><u>08001-23-31-000-2012-00318-01</u></a> <a href="#"><u>(2700-2013)</u></a>  29 de noviembre de 2024
<p>Un docente de una institución educativa en Sabanalarga, Atlántico, fue sancionado con destitución e inhabilidad por actos sexuales abusivos contra estudiantes de secundaria. Las denuncias surgieron durante una jornada sobre violencia de género. Aunque el docente alegó vulneración al debido proceso por no poder contrainterrogar a las víctimas.</p> <p>El Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda confirmando la sanción, aplicando el principio de protección reforzada a menores. La decisión se basó en pruebas testimoniales y en normas que priorizan la dignidad e intimidad de los niños en procesos disciplinarios por violencia sexual.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<b>Consejo de Estado</b> Sala de lo Contencioso Administrativo  <b>Sección Segunda</b> <b>Subsección B</b> C.P. Elizabeth Becerra Cornejo	<b>Nulidad y Restablecimiento del Derecho</b>  <a href="#"><u>05001-23-33-000-2014-00695-02</u></a> <a href="#"><u>(0675-2024)</u></a>  o8 de noviembre de 2024
<p>El Consejo de Estado determinó que el término de caducidad de 5 años establecido en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 no aplica a actos de reconocimiento pensional que ya estaban siendo cuestionados judicialmente antes de su vigencia. Esto, en garantía de la confianza legítima y la seguridad jurídica.</p> <p>En consecuencia, se inaplica dicha norma por ser incompatible con la Constitución, y se mantiene la regulación vigente al momento de la demanda, que no contemplaba caducidad para este tipo de acciones.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<b>Consejo de Estado</b> Sala de lo Contencioso Administrativo  <b>Sección Tercera</b> <b>Subsección A</b> C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez	<b>Ejecutivo</b>  <a href="#"><u>54001-23-31-000-1999-01157-02</u></a> <a href="#"><u>(70.467)</u></a>  21 de febrero de 2025
<p>El Consejo de Estado definió que las normas procesales aplicables en procesos de jurisdicción coactiva dependen del régimen vigente al momento de iniciar el proceso. En demandas posteriores a la Ley 2080 de 2021, se aplica el CPACA modificado y los intereses moratorios deben liquidarse según el código bajo el cual se inició el proceso. También se destacó que los intereses moratorios en procesos iniciados bajo el CCA deben liquidarse según sus propias disposiciones, sin mezclar con las normas del CPACA, incluso si la sentencia se dictó bajo este último.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<b>Consejo de Estado</b> Sala de lo Contencioso Administrativo  <b>Sección Tercera</b> <b>Subsección A</b> C.P. José Roberto Sáchica Méndez	<b>Controversias Contractuales</b>  <a href="#">63001-23-33-0002020-00421-01</a> <a href="#">(70.045)</a> 4 de abril de 2025
La Subsección declaró la nulidad del contrato estatal No. 012 de 2015 entre Armenia y la Unión Temporal Vías Armenia por actos de corrupción. Ordenó las restituciones mutuas, excluyendo ganancias del contratista y sumas desviadas ilícitamente. Confirmó la aplicación del término supletivo de liquidación y la suspensión del término de caducidad por conciliación prejudicial. Rechazó reconocer utilidades empresariales derivadas de actos ilícitos y estableció responsabilidad solidaria entre los miembros de la unión temporal.	

Fuente	Radicación / Fecha
<b>Corte Constitucional</b> M.P. Natalia Ángel Cabo	<a href="#">Sentencia T- 045 del 6 de febrero de 2025</a>
La Corte Constitucional ordenó el reintegro de dos mujeres embarazadas despedidas sin autorización del Ministerio de Trabajo, vulnerando su estabilidad laboral reforzada. En uno de los casos, la renuncia fue inducida por acoso laboral y restricciones para asistir a controles médicos. La Corte concluyó que la renuncia no fue libre ni voluntaria, por lo que ordenó su anulación, el pago de salarios y prestaciones, y la reubicación laboral. También pidió investigar el acoso denunciado, reafirmando la protección especial a mujeres embarazadas frente a despidos discriminatorios.	

Fuente	Radicación / Fecha
<b>Corte Constitucional</b> M.P. Juan Carlos Cortés González	<a href="#">Auto 559 del 29 de abril de 2025</a>
La Sala Segunda de Revisión realizó 30 tutelas por negación de medicamentos por parte de EPS. Como medida provisional, ordenó su entrega inmediata para proteger el derecho a la salud, sin que esto represente un daño desproporcionado para las entidades. La Corte identificó distintos escenarios de incumplimiento y reiteró que la entrega debe ser oportuna y continua. También ordenó medidas para evitar interrupciones por desabastecimiento y asignó vigilancia a la Procuraduría, Defensoría y Superintendencia de Salud para garantizar el cumplimiento y acompañamiento a los pacientes.	



Fuente	Radicación / Fecha
<b>Corte Constitucional</b> M.P. Diana Fajardo Rivera.	<a href="#">Sentencia T- 168 del 08 de mayo de 2025</a>
<p>La Sala Tercera de Revisión reiteró que el Estado es responsable objetivamente por daños causados por minas antipersonal a erradicadores manuales, incluso si estos aceptaron el riesgo al ser contratados. En el caso de Benjamín Llanos, fallecido durante labores de erradicación, la Corte anuló un fallo que negó reparación a su familia, señalando que se ignoraron pruebas clave y se impuso una carga probatoria desproporcionada. Ordenó una nueva sentencia que reconozca la responsabilidad estatal, valore integralmente las pruebas y garantice una reparación completa a las víctimas.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
<b>Corte Constitucional</b> M.P. Juan Carlos Cortés González	<a href="#">Sentencia T – 149 del 30 de abril de 2025</a>
<p>La Corte Constitucional analizó una tutela presentada por un periodista, bloqueado en redes sociales por una congresista indígena Wayuu, quien alegó violencia de género digital. Aunque la Corte consideró desproporcionado el bloqueo total, reiteró que los discursos que constituyen violencia de género contra mujeres en política no están protegidos por la libertad de expresión.</p> <p>Ordenó al periodista eliminar publicaciones ofensivas y abstenerse de repetirlas. La Corte subrayó la necesidad de entornos digitales seguros para mujeres políticas, especialmente aquellas con identidades históricamente discriminadas, como las mujeres indígenas.</p>	